

En Santiago, a quince de mayo de dos mil diecisiete.

Vistos y considerando:

Primero: Que a fojas 1, Macarena Valdivia Acevedo, por sí y en representación de su hijo menor de edad, Máximo Basoalto Valdivia, Michel Basoalto Valdivia, Luis Alfredo Valdivia Acevedo, Carlos Enrique Valdivia Acevedo; Mireya Farías Gutiérrez; Paula Conejeras Silva, por sí y en representación de sus hijos menores de edad Rodrigo Polanco Conejeras y Moisés Contreras Conejeras; Moisés del Carmen Contreras Díaz; María Inés Acevedo Arriagada; Johan Herrera Ortega; Margarita Valdivia Gutiérrez; Margarita Díaz Valdivia; María José Matus Díaz; y Yocelin Yañez Leyton, todos con domicilio para estos efectos en calle Cancha de Carrera N°1450, comuna de Isla de Maipo, interponen recurso de protección contra de la COOPERATIVA DE AGUAS Y ALCANTARILLADO SANTA MARGARITA y SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD METROPOLITANO, por considerar que su actuar ilegal y arbitrario ha vulnerado sus garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N° 8, 1 y 24, de la Constitución Política de la República, solicitando se ordene paralizar la operación de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas, hasta que Cooperativa Santa Margarita realice y garantice la ejecución de las obras que desde su aprobación fueron comprometidas para mitigar los malos olores, y además, asegurar su operación dentro de los parámetros exigidos por la ley y que aseguren que los derrames de aguas servidas se detendrán y se instruya a la Seremi adoptar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de todas y cada una de las medidas contempladas en la RCA citada, y que garantizaran el respeto a nuestro derechos constitucionalmente reconocidos. siendo indispensable paralizar la operación de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas, hasta que Cooperativa Santa Margarita realice y garantice la ejecución de las obras que desde su aprobación fueron comprometidas para mitigar los malos olores, y además, asegurar su operación dentro de los parámetros exigidos por la ley y que aseguren que los derrames de aguas servidas se detendrán y se instruya a la Seremi adoptar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de todas y cada una de las medidas contempladas en la RCA citada, y que garantizaran el respeto a nuestro derechos constitucionalmente reconocidos.



QBJYBGWPMQ

Son un grupo de vecinos que reside al costado poniente de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de "La Islita", ubicada en calle Cancha de Carrera Nº 554, Comuna de Isla de Maipo, propiedad de la recurrida y que se encuentra próxima a tres poblaciones de la comuna. La recurrida opera desde el año 2010, cuenta con Resolución de Calificación Ambiental (RCA) N°16-20101, y su supervigilancia y fiscalización es ejercida por la Secretaría Regional Ministerial ("Seremi") de Salud Metropolitana, por tratarse de un ente privado que no cuenta con una Concesión Sanitaria.

Indican que el día 13 de septiembre de 2016, en horas de la madrugada, se produjo un derrame de aguas servidas y lodo desde la Planta de propiedad de la recurrida hacia sus casas, cuya magnitud constataron durante las primeras horas de la mañana y que se extendió por aproximadamente 3.500 metros cuadrados, que incluyó patios, quincho, pesebreras y una noria que es utilizada para regadío y abrevadero de animales. Este hecho, es el resultado de un proceder negligente de la recurrida, además, para responder a la situación de emergencia sus medidas resultaron improvisadas e insuficientes para resolverlas y para paliar los efectos nocivos de los derrames. Claramente no se respetaron las instrucciones impartidas por la Seremi de Salud desde el inicio de los problemas.

El 16 de septiembre, se produjo un nuevo derrame de aguas servidas, de menor magnitud, que igualmente representa un foco infeccioso y demuestra la negligencia con la cual la recurrida enfrenta esta emergencia sanitaria, la cual aún no se encuentra controlada y el día 10 de octubre de 2016, a eso de las 13.00 horas, se produjo un rebalse de las piscinas de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas, acompaña de un mayor e insoportable hedor a heces, y que sólo a instancia de los insistentes llamados de doña Macarena Valdivia Acevedo al personal de la Planta, fue controlado. Al momento de dicha emergencia, no había personal al interior de la Planta.

Reclaman que no han recibido ninguna respuesta por parte de la recurrida respecto al momento en que terminaran con los trabajos instruidos por la Seremi, y con la incertidumbre que, en la medida que se acerca el verano y las altas temperaturas, los restos de contaminación que aún hay en sus patios y la ausencia de sanitización del lugar, lo transformen en un foco infeccioso para sus familias, especialmente para los más pequeños,



agregando a esto olores pestilentes y putrefactos que emana de la planta que son cada vez más intensos e insoportables, y aunque desde el inicio de sus operaciones la Planta genera constantes malos olores, este fenómeno se ha intensificado desde la emergencia sanitaria y ambiental, cuestión que ha podido verificar en terreno los funcionarios de Seremi de Salud que han asistido.

Alegan que la Planta no opera correctamente, no es normal ni aceptable que en menos de un mes se hayan producido 3 situaciones de emergencia, y que hasta la fecha, no se hayan realizado medidas efectivas para evitarlas, si bien funcionarios del Seremi de Salud se han presentado constantemente a monitorear la situación, lo cierto es que el Seremi está en conocimiento del precario funcionamiento de la planta desde hace bastante tiempo, y ha cursado varios sumarios sanitarios en su contra, el último de los cuales constató el incumplimiento de requisitos indispensables para el funcionamiento de la planta, y que dicen relación con el manejo de lodos que la planta produce y el monitoreo de las aguas vertidas desde la Planta, ha omitido arbitrariamente cumplir su labor cautelar de la salud de los ciudadanos, al no decretar la suspensión de actividades de esta Planta, hasta verificar el cabal cumplimiento de las condiciones indispensables para su correcto funcionamiento, incurriendo de este modo en una arbitrariedad que permitió que estos lamentables hechos ocurrieran.

Segundo: Que a fojas 39, la empresa sanitaria recurrida pide el rechazo de la acción intentada en su contra porque no ha incurrido en omisiones ilegales o arbitrarias, en efecto, tras la emergencia que se denuncia se dio cumplimiento de las medidas ordenadas por la funcionaria de la Seremi de Salud Metropolitana con la mayor celeridad, y los trabajos correspondientes estuvieron concluidos con fecha 16 de septiembre de 2016; esto es, 3 días después de producido en desborde de la especie y el día 28 de septiembre se procedió a limpiar la noria existente en uno de los terrenos afectados.

Agrega que, además, se ha implementado un sistema de “bypass” en la planta de tratamiento, que impide la producción de rebalses y que consiste en un ducto que conecta el estanque de pre-tratamiento, con el anillo del sedimentador que descarga a las cámaras de inspección por donde evacúa el agua tratada, y sólo se activa si el nivel de aguas pre-tratadas supera cierto



nivel, por lo que operará en caso que llegase a producirse algún atascamiento en las bombas de traspaso al reactor biológico.

Alega que su parte ignora cuál es la relación de cada uno de los trece recurrentes con los terrenos que se vieron afectados por el rebalse de aguas tratadas, teniendo claro que los efectos de ese hecho incidieron únicamente en los terrenos colindantes al sector poniente de la planta y respecto de los cuales se adoptaron todas las medidas de limpieza, sanitización y prevención dispuestas en su oportunidad por la Seremi de Salud.

Expone que no es efectivo que se haya producido un nuevo derrame el día 16 de septiembre, que la empresa opera su planta de tratamiento de aguas servidas con todas las autorizaciones que la legislación aplicable en la especie establece y, en su operación, cumple estrictamente con las exigencias y procedimientos dispuestos en esta misma legislación y que se han previsto y ejecutado medidas de mitigación ante la eventualidad de producirse olores molestos.

Tercero: Que a fojas 53 informa la Secretaria Regional Ministerial de Salud Región Metropolitana, solicitando su rechazo en atención a que, en primer término, la empresa recurrida es un prestador de servicios sanitarios concesionado, regido por el DFL N° 382/88, por lo que su fiscalización ha quedado radicada en la Superintendencia de Servicios Sanitarios, sin perjuicio de las atribuciones de orden general que en materia de salud pública tiene esta Autoridad Sanitaria.

Expone que, en cuanto a la prohibición de funcionamiento solicitada el artículo 178 del Código Sanitario establece que estas medidas podrán ser impuestas por el ministro de fe, con el solo mérito del acta levantada, cuando exista un riesgo inminente para la salud, pero a la luz de los antecedentes expuestos, se debe tener presente, que esta Autoridad Sanitaria fiscaliza una actividad en operación desde el año 2011 y cuya población beneficiaria consta de 8.640 habitantes, los que por factibilidades técnicas, deben verter sus descargas domiciliarias diarias única y exclusivamente a la Planta, servicio que por razones obvias no debe ser interrumpido arbitrariamente, lo que en sí presentaría inmediatamente la afectación de las garantías constitucionales objetos del presente recurso, puesto que la paralización de dichas actividades en términos prácticos, significaría que las descargas domiciliarias al no tener disposición final a un efluente, se acumularían



QBJYBGWPMQ

directamente en las instalaciones de la Planta, sin pasar por el tratamiento sanitario correspondiente, hasta el punto de sobrepasar su capacidad, devolviéndolas en esa misma forma por el alcantarillado domiciliario, además de tener situaciones de contingencias sanitarias similares sufridas por los recurrentes, situación que generaría automáticamente un riesgo inminente para la salud de esa población.

Alega que como autoridad sanitaria, ha cumplido con su labor fiscalizadora sobre la actividad en cuestión, como bien fuera señalado por los recurrentes, ya que informó los resultados de la fiscalización a la Planta, requerida por el Diputado Juan Coloma Álamos, donde se constataron algunos incumplimientos a la normativa vigente, por lo cual, se instruyó el sumario sanitario № 1943-2016, haciendo presente que las materias fiscalizadas en esa oportunidad, relativas a olores molestos, no son competencia de esa Secretaria, por tanto, en virtud de lo establecido en el artículo 14 de la Ley 19.880, dicho expediente fue remitido a la Superintendencia del Medio Ambiente.

Agrega que en 4 oportunidades una funcionaria de esa Secretaria realizó visitas inspectivas por solicitud de fiscalización espontánea y al constatarse ciertos riesgos a la salud de la población se dictaron las diversas medidas sanitarias de implementación inmediata por parte de la Planta.

Por lo anterior, entiende que como autoridad sanitaria ha actuado dentro del marco de sus facultades legales, fiscalizando una actividad que se encuentra en funcionamiento desde el año 2011, objeto de una concesión sanitaria fallida, situación comunicada en Septiembre de 2015 por la Superintendencia de Servicios Sanitarios y que debe someterse nuevamente al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, lo que excluye de plano que debamos ser el órgano encargado de la regularización de los permisos de funcionamiento de esta actividad.

Cuarto: Que a fojas 62 la Superintendencia del Medio Ambiente informa que la investigación de los hechos denunciados se debe realizar en un procedimiento administrativo sancionatorio, cuyo punto de partida se encuentra en la formulación de cargos en contra del presunto infractor, quien tiene la posibilidad de controvertir los hechos y presentar descargos (defensas), o bien puede aceptar los hechos y presentar un programa de cumplimiento. En caso de que el titular decida controvertir los hechos, puede



acompañar todos los medios probatorios que estime conveniente para acreditar sus alegaciones o defensas. Todo ello en aplicación de la normativa contenida en los artículos 49 y siguientes de la Ley 20.417.

Expone que una vez que el procedimiento administrativo sancionatorio recién explicado haya finalizado, la SMA estará en condiciones de pronunciarse sobre si la planta de tratamiento de La Islita fue modificada y si estas modificaciones requieren ingresar a evaluación ambiental o si ellas constituyen un incumplimiento a la RCA N°16/2010.

Agrega que las etapas preliminares que anteceden al inicio de un procedimiento sancionatorio, se encuentran iniciadas desde el 17 de junio de 2016, que es la fecha en que la SEREMI de Salud remitió el Ord. N° 4139, donde le informa que se está desarrollando un sumario sanitario por los hechos relatados en el recurso de protección y le pide investigar, al tenor de las competencias dadas en la Ley 20.417, si existen incumplimientos a la RCA 16/2010 en relación a la operación de la planta y a la generación de olores molestos. De este modo se dio inicio a la instrucción de una etapa de investigación pre-procedimental, donde se deben evaluar los antecedentes recibidos y en definitiva se va a determinar si es posible iniciar un procedimiento sancionatorio en base a los hechos denunciados.

Quinto: Que consta a fojas 76 informe evacuado por la Superintendencia de Servicios Sanitarios, en el que se expone que la cooperativa recurrida no detenta la calidad de concesionaria sanitaria, y no se encuentra inscrita en el Registro Público de Concesionarias que lleva ese Organismo, razón por la cual, no es sujeto de fiscalización de esa Superintendencia, sin perjuicio de las facultades que correspondan respecto de su fiscalización y control al Servicio de Salud. Lo anterior, por cuanto no ha dado cumplimiento a los requisitos establecidos entre otros cuerpos legales, en el D.F.L. MOP N° 382/88, su Reglamento el D.S. MOP N°1.199 de 2004, ni se ha podido someter a la normativa establecida en el D.F.L. MOP N° 70/88 y en su Reglamento el D.S. MINECON N° 453/89 para detentar la calidad de concesionaria de servicios públicos sanitarios, ya que ante la solicitud de la Cooperativa se le requirió el cumplimiento de una serie de requisitos técnicos y legales para efectos de proceder a formalizar la concesión por los servicios de producción y distribución de agua potable y recolección y disposición de aguas servidas para el sector "La Islita", de la



QBJYBGWPMQ

comuna de Isla de Maipo, Región Metropolitana, lo cual no ha cumplido ya que no presentó un programa de desarrollo para los servicios de agua potable y alcantarillado, definido en base a un estudio de pre factibilidad técnica y económica, con una descripción técnica general y un cronograma de obras, acerca de las inversiones comprometidas por el interesado y su ejecución, de forma tal que se cumpla con las exigencias de los servicios públicos, no ha dado cumplimiento a las normas del régimen tarifario que están establecidas para las concesiones de servicios públicos sanitarios, no dio cumplimiento a los antecedentes legales solicitados relativos a acreditar el dominio sobre los derechos de aprovechamiento de las fuentes de producción de agua potable necesarias para dar servicio con un horizonte de 5 años, o bien, el uso de derechos de terceros, mediante contratos - arriendo - comodato, etc. - que consten en escritura pública, destinados a entregar la seguridad suficiente de que tales derechos en uso permanecerán en poder del prestador para cumplir con el programa de desarrollo. Tampoco ha dado cumplimiento a la exigencia de garantizar las concesiones, dado que el prestador debe presentar documentos de garantía - pólizas de seguro o boletas bancarias - que resguardan tanto la prestación del servicio como el cumplimiento del programa de desarrollo.

Sexto: Que previa vista de la causa y habiendo oído a las partes, con fecha 14 de febrero del presente año se dictaron medidas para mejor resolver que dieron como resultado que a fojas 94, Carabineros de Chile remitiera a esta Corte la nómina de vecinos de calle Cancha Carrera, sector La Islita, en la cual constan los recurrentes de la presente acción.

Asimismo, a fojas 102, la Superintendencia de Salud remite una minuta con el detalle de las actuaciones realizadas producto del derrame ocurrido el día 13 de septiembre de 2016.

A fojas 116 y 135 consta oficio de la Superintendencia del Medio Ambiente, en el que se señala que con posterioridad a la denuncia que ya se encuentra en conocimiento de dicha entidad no se han recibido nuevos reclamos, por lo que no se han realizado nuevas actividades de fiscalización en terreno. Por esto, las únicas actividades que está realizando en relación a los hechos, son los relativos a la investigación pre- procedimental que aún está en curso.



QBJYBGWPMQ

Por su parte, la Municipalidad de Isla de Maipo, a fojas 123, remite informe de la Unidad Ambiental de dicha municipalidad relativa a nuevos episodios de derrames y de malos olores que afectan a los vecinos del sector.

A fojas 129 consta informe de la Seremi de Salud en la que se detallan las visitas inspectivas que se realizaron con posterioridad al derrame de fecha 13 de septiembre de 2016 y en el cual no se constataron nuevos derrames ni la existencia de malos olores emanados de la Planta.

Finalmente, a fojas 144, Carabineros de Chile de la Tenencia de Isla de Maipo remite copia de cuatro constancias de fecha posterior al derrame de 13 de septiembre de 2016 por malos olores en el sector.

Séptimo: Que, de los antecedentes recabados aparece que los recurrentes son vecinos de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de "La Islita" perteneciente a la Cooperativa de Aguas y Alcantarillado Santa Margarita, como lo constató Carabineros de Chile, que los derrames de aguas servidas denunciados, efectivamente ocurrieron en las oportunidades que se señalan y que con posterioridad a esas situaciones se produjeron nuevas denuncias por malos olores y otros episodios de derrames.

Octavo; Que, en estas condiciones aparece que la Cooperativa de Aguas y Alcantarillado Santa Margarita afecto gravemente los derechos de los vecinos de la comuna de Isla de Maipo, en especial de las poblaciones aledañas al sector en que opera, por los derrames de aguas servidas que se produjeron desde esa planta los días 13 y 16 septiembre de 2016, y que continuaron después incluso de denunciarlos, como dan cuenta los informes policiales antes mencionados. Dichos derrames inequívocamente dañan, contaminando el medio ambiente en que habitan los recurrentes y sus vecinos, porque los residuos que procesa la Cooperativa denunciada, por sus características, producen malos olores y elementos que afectan seriamente la salud de las personas, más aún si estos exceden los límites en que deberían encontrarse contenidos y se introducen en los predios vecinos, en los que la población habita y realiza sus actividades cotidianas.

Noveno: Que, en estas condiciones, aparece con claridad que los recurrentes, sus familias y vecinos se encuentran en grave riesgo sanitario por los elementos altamente contaminantes, como son las aguas que se encuentran en proceso de tratamiento en la Planta denunciada, las que se



han desbordado sus contenciones e introducido en el lugar que habitan, afectando su medio ambiente y de esta forma su salud y calidad de vida, derechos fundamentales de toda persona a los que el Estado se obliga a proteger por mandato constitucional.

Décimo: Que, en la especie, la actividad de la planta recurrida es de alto riesgo para los derechos señalados. por lo que su tratamiento se encuentra normado y sujeto a la vigilancia y fiscalización de las autoridades, de forma que la contingencia de que estos desborden los lugares de su procesamiento no deberían ocurrir y menos aún reiterarse, en estas condiciones, la Cooperativa recurrida debe realizar de manera en extremo acuciosa su actividad de procesamiento de residuos de alcantarillado y de aguas servidas, lo que no hizo porque se han producido malos olores en el sector y peor aún los derrames que se denuncian.

Undécimo: Que, establecida la existencia de los hechos denunciados y la vulneración de los derechos fundamentales de los recurrentes, aparece que la Cooperativa de Aguas y Alcantarillado Santa Margarita, incumplió de manera reiterada con sus obligaciones de mantener los servicios de manera eficiente y de forma que las aguas servidas en proceso de purificación no rebalsaran a los predios vecinos, de igual forma los órganos estatales y comunales que deben velar por el cumplimiento de los estándares necesarios para proteger a la población de situaciones como las denunciadas, no ejercieron oportuna ni adecuadamente sus funciones de fiscalización haciendo posible que estos hechos ocurrieran y se reiteraran.

Décimo Segundo: Que, de esta forma, es necesario determinar cuál de las instituciones requeridas en el presente recurso son las facultadas para tomar medidas acorde a los hechos narrados por los recurrentes. En este sentido, conforme lo informado a fojas 76 por la Superintendencia de Servicios Sanitarios y que fuera corroborado por las partes en las alegaciones realizadas en estrado, aparece que al no detentar la cooperativa recurrida la calidad de concesionaria sanitaria, y no encontrarse inscrita en el Registro Público de Concesionarias correspondiente, no es sujeto de fiscalización por dicha Superintendencia.

Décimo Tercero: Que, en estas condiciones corresponde a la Superintendencia del Medio Ambiente y el Servicio Regional Metropolitano de



QBJYBGWPMQ

Salud ejercer sus facultades fiscalizadoras sobre el actuar de la empresa recurrida.

La Superintendencia informó que existe un proceso administrativo contra la Cooperativa de Aguas y Alcantarillado Santa Margarita para investigar los mismos hechos materia del recurso los que, según lo informado a fojas 116 y 135, se encuentra pendiente de resolución, sin que hasta la fecha de este fallo, se haya adoptado medida alguna en contra del actuar de la empresa, esto a pesar de que a la fecha se han presentado nuevas denuncias, especialmente por malos olores, por parte de los vecinos del sector, lo que indudablemente entra en la esfera de su competencia, conforme lo dispuesto en los artículos 2° y 3° de la Ley Orgánica Constitucional que crea dicho organismo. En este punto, es necesario detenerse en las facultades específicas contenidas en la letra h) del artículo 3°, que permite a la Superintendencia “suspender transitoriamente las autorizaciones de funcionamiento contenidas en las Resoluciones de Calificación Ambiental o adoptar otras medidas urgentes y transitorias, para el resguardo del medio ambiente, cuando la ejecución u operación de los proyectos o actividades, genere efectos no previstos en la evaluación y como consecuencia de ello se pueda generar un daño inminente y grave para el medio ambiente”.

Décimo Cuarto: Que, en cuanto a la Seremi de Salud, acorde a lo preceptuado en el artículo 14 B de la Ley 19.937, especialmente en su numeral segundo que señala que deberá “ejecutar las acciones que correspondan para la protección de la salud de la población de los riesgos producidos por el medio ambiente y para la conservación, mejoría y recuperación de los elementos básicos del ambiente que inciden en ella, velando por el debido cumplimiento de las disposiciones del Código Sanitario y de los reglamentos, resoluciones e instrucciones sobre la materia, para lo cual se encontrará dotado de todas las facultades y atribuciones que el Código Sanitario y demás normas legales y reglamentarias sanitario ambientales le confieren, de conformidad con lo previsto en el Artículo 14C”, ya que como ha quedado establecido en este fallo, los hechos acaecidos el 16 de septiembre de 2016 y sus consecuencias que hasta hoy perturban a los vecinos de la Planta de tratamiento, pueden tener evidentes consecuencias en la salud de éstos, lo que autoriza de plano la fiscalización y la toma de medidas necesarias y urgentes por parte de la autoridad de salud.



QBJYBGWPMQ

Décimo Quinto: Que de esta forma aparece que la recurrida Cooperativa de Aguas y Alcantarillado Santa Margarita, la Secretaría Regional Ministerial ("Seremi") de Salud Metropolitana y la Superintendencia del Medio Ambiente han incumplido sus obligaciones al producir, la primera, derrames reiterados de aguas servidas en los predios vecino y las dos últimas por no ejercer adecuadamente las labores de vigilancia y supervisión de las actividades de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de "La Islita" y de la Cooperativa recurrida; estas se encontraban, además, obligadas a adoptar ante estas situaciones de emergencia las medidas para paliar prontamente las nocivas consecuencias de los derrames de aguas servidas e impedir su reiteración, lo que no hicieron, afectando reiteradamente los derechos fundamentales, antes señalados, de los vecinos del sector y de los recurrentes, por lo que esta acción constitucional será acogida.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excm. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección de las garantías constitucionales de 24 de junio de 1992, **SE ACOGE** la acción constitucional deducida a fojas 1 por los vecinos que se individualizaron en el motivo Primero de este fallo, con costas del recurso y se ordena a las Secretaría Regional Ministerial ("Seremi") de Salud Metropolitana y Superintendencia del Medio Ambiente adoptar todas las medidas para asegurar que no se vuelvan a producir los derrames de aguas servidas y mitigar los malos olores que produce la Planta denunciada, debiendo, en su caso **paralizar de inmediato sus operaciones** y asegurar en sus respectivas áreas de control que la Cooperativa recurrida realice y garantice la ejecución de las obras que desde su aprobación fueron comprometidas para mitigar los malos olores, y además, asegurar su operación dentro de los parámetros exigidos por la ley que aseguren que los derrames de aguas servidas se detendrán.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad, archívese.

Redacción de la Ministra señora Cabello.

Rol N° 3708-2016 – PROT.

Pronunciada por la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel, integrada por las Ministros señora Lya Cabello Abdala, señora Carmen Gloria



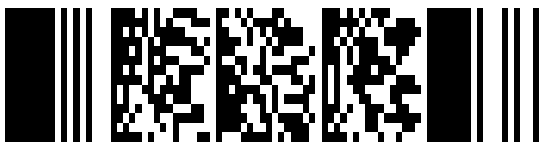
QBJYBGWPMQ

Escanilla Pérez y Abogado Integrante señor Cesar Toledo Fuentes. Se deja constancia que no firma el Abogado Integrante señor Toledo, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y posterior acuerdo del fallo, por haber cesado en sus funciones.



Pronunciado por la Tercera Sala de la C.A. de San Miguel integrada por los Ministros (as) Lya Graciela Cabello A., Carmen Gloria Escanilla P. San miguel, quince de mayo de dos mil diecisiete.

En San miguel, a quince de mayo de dos mil diecisiete, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



QBJYBGWPMQ

Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado en <http://verificadoc.pjud.cl> o en la tramitación de la causa.
Durante el período del 14 de mayo de 2017 al 13 de agosto de 2017, la hora visualizada corresponde al horario de invierno establecido en Chile Continental. Para la Región de Magallanes y Antártica Chilena sumar 1 hora. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas.